



Dirección General
del Servicio Público de Empleo
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO

Unión Europea

Fondo Social Europeo
"El FSE invierte en tu futuro"



MEMORIA DE NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIOS TITULADO "ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN LABORAL Y DE LAS NECESIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TANTO EN EL ÁMBITO DEL EMPLEO PROTEGIDO COMO DEL EMPLEO ORDINARIO EN LA COMUNIDAD DE MADRID, OPERACIÓN COFINANCIADA POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO EN EL PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020 DE LA COMUNIDAD DE MADRID."

De conformidad con lo que establece el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se exponen a continuación los fines institucionales, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas.

Según el Decreto 42/2021, de 19 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, le corresponden a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo las competencias que actualmente ostenta la Consejería de Hacienda y Función Pública. Asimismo, le corresponden las competencias actualmente atribuidas a la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, con excepción de las competencias en materia de energía.

Por su parte, el Decreto 88/2021, de 30 de junio, por el que se modifica la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, adscribe la Dirección General del Servicio Público de Empleo a la citada Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

En materia de competencias, el Decreto 287/2019, de 12 de noviembre, atribuye a la Dirección General del Servicio Público de Empleo, la competencia para "la realización de los estudios e investigaciones del mercado de trabajo que sean necesarios para planificar y ejecutar las políticas de empleo" y las de "planificación de estrategias, proyectos y políticas de empleo, así como su evaluación y difusión".

Por ello, ha considerado de gran interés general económico y social la tramitación del expediente de contratación de servicios para la realización de un estudio de **"ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN LABORAL Y DE LAS NECESIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TANTO EN EL ÁMBITO DEL EMPLEO PROTEGIDO COMO DEL EMPLEO ORDINARIO EN LA COMUNIDAD DE MADRID, OPERACIÓN COFINANCIADA POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO EN EL PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020 DE LA COMUNIDAD DE MADRID."**

En primer lugar, cabe señalar que a pesar de los avances a nivel de políticas de inclusión, la participación en el mercado laboral sigue siendo un desafío importante para las personas con discapacidad, ya que participan con menos frecuencia en el mercado laboral abierto y corren un mayor riesgo de pobreza o exclusión social. Su integración en el mundo del trabajo es un proceso dinámico que implica interacciones entre factores organizacionales, personales y contextuales, que se ha agravado por la incertidumbre económica y laboral causada por la COVID-19.

Es oportuno hacer referencia a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), ratificada por España el 3 de diciembre de 2007 y que entró en vigor el 3 de mayo de 2008. La Convención supone la consagración del enfoque de derechos de las personas con discapacidad, de modo que considera a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos y los poderes públicos están obligados a garantizar que el ejercicio de esos derechos sea pleno y efectivo. El Art. 27 de la Convención de las Naciones Unidas de las personas con discapacidad reconoce el "derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad".

La aplicación de la Convención en España se ha desarrollado, entre otros instrumentos, mediante la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad.

La Comisión Europea ha presentado una Estrategia de discapacidad reforzada para el período 2021-2030, basada en la Estrategia 2010-2020, que logró integrar las cuestiones de discapacidad en la legislación de la Unión Europea (UE) y hacer avanzar la discapacidad en la agenda política de la UE. La nueva Estrategia tiene como objetivo mejorar la vida de las personas con discapacidad en la próxima década, en la UE y más allá. Los objetivos de esta Estrategia solo pueden alcanzarse mediante una acción coordinada tanto a nivel nacional como de la UE, con un fuerte compromiso de los Estados miembros y las autoridades regionales y locales para cumplir las acciones propuestas por la Comisión.

Por su parte, el Real Decreto Legislativo 1/2013, que recoge la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, establece que "las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo, en condiciones que garanticen la aplicación de los principios de igualdad de trato y no discriminación" (Art. 35.1.) y que "será finalidad de la política de empleo aumentar las tasas de actividad y de ocupación e inserción laboral de las personas con discapacidad, así como mejorar la calidad del empleo y dignificar sus condiciones de trabajo, combatiendo activamente su discriminación. Para ello, las administraciones públicas competentes fomentarán sus oportunidades de empleo y promoción profesional en el mercado laboral, y promoverán los apoyos necesarios para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo" (Art. 37.1.).

Así mismo, en la Estrategia Madrid por el Empleo 2021-2023, se presta especial atención y se fomenta la integración laboral de las personas con discapacidad en el mercado laboral ordinario, sin perder de vista a la vez la necesaria atención a los Centros Especiales de Empleo.

La Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid ha de promover las políticas activas de empleo que faciliten el equilibrio entre la demanda y la oferta de trabajo, en especial aquellas destinadas a orientar a los demandantes de empleo, sensibilizarles sobre los requerimientos de las empresas y planificar su formación en aquellas competencias que mejoren su empleabilidad. Por ello, es primordial continuar

apostando por el fomento del empleo entre las personas con discapacidad y, de forma especial, por su acceso al empleo ordinario, identificando necesidades y estableciendo políticas/actuaciones de empleo y formación, así como de evaluación y acreditación de las competencias profesionales que faciliten y promuevan su integración laboral y el mantenimiento del empleo, y la posibilidad de cambiar de empleo y/o volver al trabajo después de una ausencia.

Por tanto, el objeto de este contrato es la realización de un estudio para analizar la situación laboral y necesidades de empleo y formación de las personas con discapacidad (en adelante PcD) en la Comunidad de Madrid, tanto, para las que trabajan en empleo protegido como en el mercado ordinario, y realizar propuestas que mejoren su empleabilidad e inserción laboral, en general, y en el marco de las políticas activas de empleo, en particular.

Con este estudio se persigue como finalidad:

- Conocer la situación laboral de las PcD y hacerla más visible.
- Mejorar la eficacia de los servicios y/o programas prestados desde el Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid, según las características y necesidades que presenta este grupo de personas.
- Abordar medidas nuevas o complementarias a las ya existentes para favorecer la empleabilidad e integración laboral de las PcD tanto en términos cuantitativos como cualitativos, especialmente en el empleo protegido y en el mercado ordinario.
- Fomentar la sensibilización y la comprensión de la discapacidad para garantizar la no discriminación y la igualdad de oportunidades que adicionalmente ponga en valor el talento de las PcD, mediante la divulgación y difusión de los resultados, entre las empresas, organizaciones, entidades, Administraciones, centros educativos y de formación y ciudadanos en general.

El contrato está cofinanciado en un 50% por el Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020, Eje Prioritario 8, Objetivo específico 2: Realizar estudios y evaluaciones de calidad para medir la eficacia, eficiencia e impacto del Programa Operativo, con el fin de hacer un uso eficiente de los recursos financieros, contribuyendo a la consecución del resultado que persigue la CM con ayuda de la Unión Europea: "Progresar en la mejora de las actuaciones desarrolladas, buscando la máxima eficacia y eficiencia, con las menores cargas administrativas posibles".

LA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Firmado digitalmente por: GARCÍA DÍAZ MARIA BELEN
Fecha: 2021 10 25 22:23